

CAMBIO CON CONTRADICCIONES

Para saber cuál ha sido el valor de la cumbre de París habrá que ver cómo se aplican sus resultados.

En diciembre de 2015, durante la última cumbre realizada en París, los 196 Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático arribaron a una posición común y acordaron adoptar medidas para luchar contra este problema. ¿Un éxito impresionante? Cuidado, no tan rápido. Basta posar la mirada sobre algunos de los países más importantes para poner en duda que sus resultados realmente se apliquen.

FRANCIA. Ley en peligro

➤ REDUCIR LA PROPORCIÓN DE ENERGÍA NUCLEAR, MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, PROMOVER FUENTES RENOVABLES: EN FRANCIA, LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA ES AMBICIOSA PERO SIGUE HABIENDO MUCHOS PUNTOS POCO CLAROS Y UNA GRAN RESISTENCIA.

Al final, en París hubo lágrimas de alegría. Durante su discurso de clausura de la Conferencia sobre Cambio Climático, incluso el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, estaba tan conmovido que le tembló la voz. Este hombre de 69 años, señalado por los medios internacionales como el cerebro de la operación diplomática, fue ovacionado de pie por su trabajo. Junto a él se encontraba el presidente François Hollande, quien también lo aplaudía. En 2017 se celebran en Francia las elecciones presidenciales. En el balance de gobierno, el éxito de la cumbre climática de París significa para el primer mandatario socialista un punto claramente a favor, que le resulta muy necesario habida cuenta de los bajos valores que exhibe en las encuestas.

Mucho antes de la conferencia en Francia, el país anfitrión había dejado las cosas en claro: para alcanzar el éxito había que ser convincente y constituirse en un modelo en materia de política climática. A fines de julio de 2015 la Asamblea Nacional aprobó la ley orientada al cambio energético; según el Presidente, el proyecto marca un hito en su mandato. En efecto, suena ambicioso contar con una «Ley de Transición Energética para el Crecimiento Verde». En la campaña electoral de 2012 Hollande ya había anunciado un plan en esa dirección: para 2025 la participación de la energía nuclear en la generación eléctrica debía reducirse de 75 a 50%. Para esta nación, con sus 58 reactores explotados por la empresa Électricité de France (EDF), se trata de una pequeña revolución. Junto con el lobby nuclear, los miembros conservadores del Senado se habían opuesto con firmeza a la imposición de esta fecha, que ahora se ha relativizado y figura en la ley como «aproximadamente en 2025».

En lo que respecta a sus emisiones de gases de efecto invernadero y tomando como punto de referencia el año 1990, Francia busca disminuirlas hacia 2030 un 40%, conforme a los objetivos de la Unión Europea (UE). Del mismo modo, se apunta a que en 2030 la participación de fuentes renovables en el consumo de energía total alcance el 32% (en 2012 era apenas de 14%). El consumo de energías fósiles, como petróleo y carbón, debe reducirse para 2030 en 30% en comparación con 2012. Además, se pretende que el consumo de energía en 2050 baje a la mitad de los valores registrados en 2012. No hay otro país que se haya fijado una meta tan ambiciosa. El objetivo es que en 2030 ya haya 20% menos de consumo. Con la ley, la ministra de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía, Ségolène Royal, espera crear 100.000 puestos de trabajo en los próximos tres años y lograr un mayor poder adquisitivo para los hogares.

Hay que ver si eso ocurre. «En los próximos dos años existe el riesgo de que este compromiso ambiental sufra un fuerte retroceso», dice Andreas Rüdinger, un experto en política energética y climática que se desempeña en el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) de París. «En 2017 hay elecciones presidenciales. Y ningún partido querrá correr grandes riesgos: la prioridad son los temas de seguridad y desempleo.» La ley adoptada solo define un marco, pero aún es necesario que los ministerios apliquen las medidas concretas. «A diferencia de Alemania, donde la Ley de energías renovables, por ejemplo, ya ofrece una regulación

completa y precisa, Francia requiere la presencia de reglamentaciones que establezcan los detalles. Eso puede demorar hasta tres años y afecta la seguridad jurídica», señala Rüdinger.

Quedan entonces muchos interrogantes, sobre todo en lo que respecta al plan de reducir la proporción de energía nuclear dentro de la combinación de fuentes utilizadas. Francia es una potencia nuclear por excelencia, y la confianza en la seguridad de la propia industria del sector no se ha visto tan socavada como en Alemania tras la catástrofe de Fukushima. En el marco del debate sobre el clima, muchos franceses consideran que la energía atómica es una mera necesidad para disminuir las emisiones de CO₂.

La oposición advierte sobre el aumento en el precio de la energía y el daño que puede ocasionar a la industria. A la luz de una desocupación que duplica a la de Alemania, los defensores de las centrales nucleares destacan los 400.000 puestos de trabajo directos que genera el sector. Para el futuro, se espera incluso que haya significativos éxitos en materia de exportación en la industria nuclear.

Según los cálculos iniciales de algunos expertos, sería necesario desactivar hasta 20 reactores para concretar la reducción de la participación nuclear. Sin embargo, la ley no hace referencia alguna al desmantelamiento: en principio, se dejó a la compañía estatal EDF decidir libremente sobre los reactores, tal vez porque el Gobierno temía que, en caso contrario, la empresa reclamara una enorme indemnización. Solo se limita la capacidad a un máximo de 63,2 gigavatios, lo que se corresponde con la potencia actual de las centrales. En teoría, si se incorpora a la red el nuevo Reactor Europeo Presurizado (EPR, por sus siglas en inglés), construido actualmente por el grupo empresarial Areva en la localidad normanda de Flamanville, debería cerrarse una de las plantas. No obstante, este proyecto emblemático de la industria nuclear hoy es noticia sobre todo por las fallas en una parte del reactor, y es poco probable que pueda ponerse en funcionamiento en 2017.

No cabe duda de que las centrales nucleares seguirán formando parte del paisaje francés, pero las fuentes renovables ganan terreno. Entre julio de 2014 y junio de 2015, su participación dentro de la energía consumida alcanzó 19,4%. Según un estudio realizado por RTE (operador de la red de transporte de electricidad), ERDF (empresa distribuidora) y la Asociación de Energías Renovables, hubo 25,4 gigavatios provenientes de la energía hidráulica, 9,8 GW de la eólica, 5,7 GW de la fotovoltaica y 1,7 GW de la bioenergía. Los objetivos concretos para cada tipo de energía se definirán a partir de 2016 en programas de varios años, que la empresa EDF deberá negociar con el Gobierno. Mientras tanto, el lobby nuclear hace todo lo posible para retrasar esos programas o para modificarlos a su conveniencia.

En Francia, el suministro eléctrico está centralizado: EDF tiene el monopolio. Sin embargo, gracias a las menores trabas burocráticas, cada vez son más las islas eléctricas propias que surgen a escala regional con centrales termoeléctricas de biomasa, plantas de gas metano y parques solares.

Muchos de estos proyectos de energía ecológica se enmarcan dentro del programa *Territoires à énergie positive*, que es defendido con vehemencia por la ministra de Energía. Las distintas comunas, tanto por separado como de manera conjunta, pueden solicitar un apoyo de 500.000 euros o más. Los edificios públicos obtienen un aislamiento térmico; se promueve la reconversión del parque automotor local con vehículos eléctricos; surgen pequeños parques eólicos o solares; y se inician proyectos pedagógicos orientados a la protección del medio ambiente. Hay más de 500 contratos vinculados con dichas iniciativas, y alrededor de 250 ya han recibido una subvención.

De todos modos, si se compara con Alemania, el avance de las fuentes renovables es lento. «El desarrollo de la energía fotovoltaica fue frenado varias veces para impedir que en Francia ocurriera lo mismo que en Alemania, es decir, para evitar el fenómeno del creciente aumento de costos relacionado con el denominado recargo EEG (Ley de energías renovables)», señala Andreas Rüdinger. Mientras tanto, en el caso de la energía eólica, los retrasos se deben ante todo a los complejos procedimientos de autorización.

En lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero, el Gobierno apunta sobre todo al sector de la construcción y a los transportes; el principal objetivo es el saneamiento y el aislamiento térmico de las construcciones, que generan casi la mitad del consumo de energía a escala nacional. En Francia, el aislamiento de muchas casas es decididamente malo. Los propietarios de los inmuebles deben realizar un saneamiento energético de sus viviendas en futuras refacciones y los nuevos edificios públicos deben construirse conforme a un esquema de bajo consumo. Hasta ahora, este tipo de programas de apoyo no han tenido demasiado éxito. Según lo que espera la ministra Royal, si se alcanza el objetivo de 500.000 renovaciones energéticas anuales a partir de 2017 (actualmente se generan apenas 150.000), solo en el sector de la construcción se crearían 75.000 puestos de trabajo.

A su vez, el transporte es responsable de más de una cuarta parte de las emisiones de CO₂. Se prevé que 50% del parque automotor de las autoridades públicas incorpore vehículos poco contaminantes, mientras que los taxis y los coches alquilados también deberán pasar del sistema diésel al eléctrico. Se debería instalar siete millones de estaciones de carga nuevas para vehículos eléctricos en todo el territorio del país. Las empresas con más de 100 empleados deberán elaborar un «plan de movilidad», que priorice los traslados compartidos y los medios de transporte público. Además, el impuesto al CO₂ aumentaría de los actuales 14,50 euros por tonelada a 56 euros en 2020 y hasta a 100 euros en 2030.

Royal ha puesto a disposición para los próximos tres años un total de 10.000 millones de euros destinados a la transición energética. Los fondos se suministran como préstamos a las comunas, y el programa también incluye desgravaciones fiscales, descuentos, bonificaciones y créditos sin intereses. «La suma es demasiado escasa. Según algunos estudios, sería necesario invertir en total entre 30.000 y 50.000 millones de euros por año. Lamentablemente, Francia no cuenta con ningún instrumento de financiación que cumpla un papel tan importante como el del KfW¹ en Alemania», dice Andreas Rüdinger. Debido a las arcas vacías y a los altos gastos desembolsados por Francia en su apuesta antiterrorista, la financiación de la transición energética no resulta sencilla.

Michael Neubauer trabaja como periodista independiente en París y es miembro de la red weltreporter.net.

ESTADOS UNIDOS. De frenar a liderar

➤ EL ÉXITO DE LA CUMBRE DE PARÍS FUE, ANTE TODO, UNA GENIALIDAD DIPLOMÁTICA DEL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE. ¿PERO CONTINUARÁ EL SUCESOR DE BARACK OBAMA CON SU POLÍTICA CLIMÁTICA? HOY EN DÍA, NADIE PUEDE ASEGURARLO.

El presidente estadounidense Barack Obama y su gobierno festejaron el acuerdo de París como un gran éxito internacional. De hecho, el haber logrado por primera vez que la comunidad mundial se agrupara en torno a un denominador común en política climática es mérito de una brillante tarea diplomática de Estados Unidos. Tras la debacle de 2009 en Copenhague, en los últimos años Obama se acercó hábilmente a aquellos países emergentes con mayor nivel de emisiones y generó confianza internacional a través de acuerdos bilaterales (por ejemplo, con China y Brasil). Los negociadores estadounidenses abandonaron su papel tradicional: dejaron de frenar el proceso para comenzar a liderarlo y crearon una «*high ambition coalition*» con alrededor de 100 países. Esto resultó un hito importante para el andamiaje climático fijado en París. Sin embargo, todos los involucrados son conscientes de que lo ocurrido en la capital francesa es solo un preludio. En los próximos años será esencial no solo que los diferentes países cumplan el compromiso de reducir las emisiones (entre 26% y 28% para 2025, tomando como base 2005), sino también que se afirme el impulso político en el plano internacional para luchar contra el cambio climático. Esto implica, sobre todo, que en Estados Unidos la protección del clima sea entendida como una oportunidad en materia de política interna, externa y económica.

Indudablemente, las medidas climáticas y energéticas del gobierno de Obama estarán en la mira durante la campaña electoral de 2016. La precandidata demócrata Hillary Clinton reaccionó inicialmente de manera positiva frente a los avances de París. En cambio, Bernie Sanders, situado como ala izquierda en la interna partidaria, considera que el acuerdo es insuficiente.

Entre los aspirantes republicanos el resultado fue recibido en silencio, casi con indiferencia. Probablemente esto se debe a dos motivos: por un lado, ninguno de los candidatos quiere reconocerle a Obama el éxito internacional; por el otro, una condena al acuerdo climático alejaría a muchos republicanos moderados, cuyo apoyo es necesario. Según una encuesta llevada a cabo por *The New York Times* y *CBS News*, dos tercios de los estadounidenses respaldan un acuerdo internacional. 75% de los consultados —entre ellos, 58% de republicanos— creen que el cambio climático representa un peligro para el medio ambiente. Esto es algo que no escapa al cálculo de los estrategas de la campaña republicana.

Cuanto más visibles sean las ventajas que otorga el convenio de París a la economía estadounidense, más posibilidades tendrá la política climática de Obama de perdurar en el plano interno. En octubre de 2015, mediante el documento denominado *American Business Act on Climate Pledge*, la Casa Blanca ya había definido el papel de la economía en la lucha contra el cambio climático para impulsar así las negociaciones en París. 81 empresas estadounidenses, con más de nueve millones de trabajadores en el país y un volumen de negocios anual conjunto de alrededor de 3 billones de dólares, se unieron para dar una clara señal en este terreno. Compañías como American Express, Coca-Cola y Apple se comprometieron a intervenir activamente en la descarbonización de la economía estadounidense. Mientras tanto, líderes empresariales como Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook) y

¹ Se refiere al Kreditanstalt für Wiederaufbau, un banco alemán gubernamental de desarrollo con sede en Fráncfort [N. del T.].

Jeff Bezos (Amazon) fundaron la «Breakthrough Energy Coalition» para promover específicamente la investigación y el desarrollo de tecnologías energéticas limpias.

No es casual que el principal negociador, Todd Stern, haya realizado la primera reunión evaluativa tras el acuerdo de París junto con representantes de las empresas estadounidenses. Desde su perspectiva, las compañías deben aprovechar el acuerdo climático para fomentar el desarrollo propio de tecnologías y servicios limpios e innovadores. Lo que subyace es la esperanza de que la coincidencia alcanzada en la capital francesa ofrezca a la economía un marco estable de inversiones e innovaciones para promover y desarrollar tecnologías limpias.

La credibilidad de Obama en las negociaciones internacionales de París se vio avalada por su Clean Power Plan (CPP), el más ambicioso proyecto formulado por el Presidente en su política nacional sobre clima y energía. Este plan apunta a reducir las emisiones en 32% para 2030 (año de referencia: 2005) y constituye la columna vertebral en la materia dentro de Estados Unidos. En los hechos, promueve en el país el abandono del carbón en favor del gas y las fuentes renovables. Como tantas otras veces, el proyecto elude al Congreso, que mantiene su inacción en el área climática, y en los próximos años será objetado por sus adversarios tanto en el terreno político como jurídico.

Resultan afectadas unas 1000 centrales eléctricas, entre las cuales hay alrededor de 600 que funcionan con carbón. Sin embargo, a comienzos de febrero la Corte Suprema suspendió temporalmente la implementación del plan. Y lo hizo en un año decisivo para el CPP: según el cronograma original, los diversos estados tenían plazo hasta septiembre de 2016 para presentar ante la autoridad ambiental competente, la Environmental Protection Agency (EPA), sus planes orientados a alcanzar los objetivos. Con la suspensión esto ha quedado sin efecto. En el curso de los próximos años el proyecto podría fracasar estrepitosamente. Todo indica que un presidente republicano anularía el CPP, y lo propio ocurriría en caso de una sentencia judicial desfavorable. 29 estados (entre ellos, Texas, Oklahoma y Luisiana) ya han iniciado acciones legales para oponerse al plan y podrían seguir retrasándolo mucho más; a propósito, cabe recordar que fueron necesarios ocho años para que la Corte Suprema autorizara a la EPA a aplicar regulaciones a las emisiones de CO₂.

¿Qué otro avance en materia climática puede alcanzar Barack Obama hasta el final de su mandato? Sin un Congreso que funcione, seguirá basándose en su poder ejecutivo (sobre todo, en la EPA). De todos modos, muchos proyectos vinculados a cuestiones climáticas y energéticas son elaborados y aplicados por los diferentes estados del país. Para 2016, la administradora de la EPA, Gina McCarthy, definió tres proyectos centrales, destinados a reducir las emisiones de metano y HFC, y a aprovechar de manera más eficiente el combustible en los vehículos de transporte de carga.

Por su parte, el Departamento del Interior —responsable de la administración de tierras fiscales— estableció una moratoria para suspender momentáneamente el arrendamiento de esas propiedades públicas, de las cuales se extrae alrededor de 40% del carbón estadounidense (por lo general, bajo condiciones que resultan especialmente beneficiosas para las empresas). Según lo previsto, la moratoria quedará cancelada cuando se sepa con claridad qué arrendamiento es adecuado en función de los riesgos para el medio ambiente y la población. En los hechos, la suspensión adoptada respalda los esfuerzos de Obama por abandonar el carbón en el plano interno.

Con su postura en París, Obama se ha convertido prácticamente en el primer presidente ambientalista de Estados Unidos. Resta por ver si su país se mantendrá fiel al legado. De todos modos, cuesta imaginar que estos esfuerzos queden en la nada, dado que en una gran parte del territorio nacional la iniciativa ya puso en marcha el cambio estructural y la consecuente disociación de crecimiento económico y emisiones. Más allá de cualquier disputa jurídica y política, la aprobación de la población estadounidense —reafirmada por la sequía y los incendios forestales en California, la agudización de la escasez de agua y los huracanes cada vez más frecuentes— se hará sentir junto con la mayor consciencia de la economía del país respecto a las ventajas de una gestión ecológica. Para Estados Unidos, el principal valor del acuerdo de París radica en el apoyo internacional que ofrece ahora el foro a estos esfuerzos.

Rebecca Bertram, Directora del Programa de Energía y Medio Ambiente, Fundación Heinrich Böll, Washington DC.

CHINA. Pequeños pasos en la dirección correcta

- SIN CHINA, EL PAÍS RESPONSABLE DE MÁS DE 25% DE LAS EMISIONES GLOBALES DE CO₂, CUALQUIER ACUERDO CLIMÁTICO CARECERÍA DE SENTIDO. EN PARÍS SE OBSERVÓ UNA POSICIÓN CONSTRUCTIVA. PERO BEIJING PUEDE HACER MÁS, Y SERÁ NECESARIO QUE LO HAGA.
-

Por lo menos, el mundo cuenta con un acuerdo climático y China forma parte de él. Es alentador que la República Popular haya abandonado su actitud obstruccionista frente al establecimiento de metas internacionales. Sin China, responsable de 27% de las emisiones globales de CO₂, cualquier acuerdo mundial carecería de sentido. La presencia de Beijing en París fue sumamente constructiva. Una declaración conjunta con Estados Unidos ya había allanado el camino: a fines de 2014, ambos países se comprometieron a trabajar de manera conjunta contra el cambio climático, en un acuerdo histórico sin el cual lo de París no habría sido posible.

A pesar de todo, no hay razón para estar eufórico. El resultado de París es insuficiente para luchar contra el cambio climático. Con este nuevo acuerdo la humanidad no detendrá el calentamiento global.

China se encuentra entre los principales responsables. Desde el punto de vista diplomático, en París ha salido airoso. Y logró evitar un desprestigio como el sufrido en las fallidas negociaciones de Copenhague en 2009. No obstante, todo indica que la política climática a nivel nacional no tendrá más que impulsos leves. A pesar de la amenaza de una catástrofe ambiental, China no está dispuesta a someterse a restricciones. En la próxima década las emisiones del país seguirán aumentando significativamente.

Beijing promete alcanzar su pico de emisiones de CO₂ antes de 2030. Lo que no se dice, sin embargo, es cuál será exactamente el nivel para entonces. Y cuando el Gobierno asegura que para 2030 va a reducir significativamente la «intensidad de CO₂», está incurriendo en una suerte de truco: la «intensidad de CO₂» mide las emisiones absolutas en relación con el producto bruto interno. Cuanto más crezca la economía china, mayor será la cantidad de gases de efecto invernadero que podrá arrojar al aire el país. Por lo tanto, nada garantiza que China controle sus emisiones.

Si realmente China quisiera detener el cambio climático, debería realizar un esfuerzo más considerable. El gran obstáculo para la transición energética del gigante asiático es el carbón: el combustible barato que impulsa el motor de la economía china. Dos tercios de la energía provienen del carbón; el país quema aproximadamente la misma cantidad que el resto del planeta en su conjunto. Dentro de este contexto, China intenta que su economía sea menos contaminante. Algunas sorpresas positivas permiten abrigar esperanzas respecto a la aplicación del acuerdo. Por ejemplo, durante años se daba absolutamente por sentado que el consumo de carbón aumentaría. Según el Gobierno, recién en 2020 se iba a alcanzar el pico. Sin embargo, a partir de 2014 el consumo de carbón descendió abruptamente. Esa caída se debió no solo a las temperaturas invernales benignas, sino también a un ambicioso plan de calidad del aire, creado por las autoridades para combatir el smog.

Entretanto, China se ha erigido en el campeón mundial de las energías renovables. En 2014 la capacidad eólica casi alcanzaba los 115 gigavatios; para 2020 ese valor podría llegar a los 250 GW. En ningún otro país hay más aerogeneradores. Últimamente también se registra una vertiginosa expansión de los paneles solares. Hasta hace pocos años, en el estado federado de Baviera había más instalaciones solares que en todo el territorio chino. En 2015 China desplazó del liderazgo a Alemania. Asimismo, con 24 reactores en fase de construcción, la energía nuclear se afirma como otro motor esencial de la transición.

Estas tendencias han generado mucho optimismo. Ya se habla de una «transición desde el carbón». Aunque China haya asumido el liderazgo mundial en materia de energías renovables, esto dista de ser suficiente. Las modalidades eólica y solar no representan ni siquiera 2% dentro de la combinación utilizada. Si el cálculo incluyera la energía hidráulica, se llegaría aproximadamente a 9%. En resumen, en las próximas décadas el carbón seguirá siendo la principal fuente de energía.

Las metas internacionales no cambiarán demasiado la velocidad ni la dirección de la transición energética china. Lo que ocurra dependerá de la dinámica en el propio país. Hay tres desarrollos importantes que pueden ser muy beneficiosos para la política climática. Pero si el Gobierno no reacciona correctamente, esos mismos desarrollos conspirarían contra los objetivos ambientales de China. En primer lugar, la política climática puede cobrar impulso a través de acciones públicas dirigidas a combatir la contaminación del aire en las ciudades. A diferencia de lo que sucede con el cambio climático, los ciudadanos protestan a viva voz por el smog. La población urbana quiere que se tomen medidas para poner fin a la grave contaminación en las metrópolis. Para reducir la concentración de partículas nocivas, las autoridades cerraron algunas centrales eléctricas alimentadas con carbón y clausuraron muchas de las empresas que producían en condiciones evidentemente «sucias». Esto repercutió positivamente en el balance de CO₂, pero el beneficio es limitado: en caso de dudas, las capacidades de carbón y las plantas industriales simplemente se trasladan más hacia el interior del país. Mientras tanto, en las fábricas, las instalaciones de filtración de dióxido de azufre reducen la eficiencia en materia de energía y aumentan así su consumo en la producción.

En segundo lugar, el declive económico también podría presentarse como una gran oportunidad para la política climática china. La reducción del exceso de capacidad en la industria pesada contraerá la demanda energética; en tal caso, las emisiones de CO₂ podrían disminuir en un corto plazo. Si al mismo tiempo China acelera la transición para dejar de ser el taller del mundo y convertirse en una economía orientada a servicios e innovaciones, podría alcanzarse una reducción significativa de CO₂. Aunque esto parece poco realista. El descenso de las emisiones de

CO2 durante la fase de ralentización económica no es un proceso espontáneo. Si el Gobierno pospone importantes medidas estructurales y decide impulsar la industria pesada a través de acciones coyunturales, la situación podría tornarse aún peor. La consecuencia sería la tendencia opuesta, con un aumento más acentuado de las emisiones de CO2.

Ya se perciben señales de algunas medidas coyunturales que favorecen a industrias «sucias», como las del acero y del cemento. Hay paquetes de inversiones que se destinan a la construcción de ferrocarriles y ductos, al sector inmobiliario y desgravaciones fiscales para los automóviles. Existen buenas razones para sostener a una industria pesada que se encuentra en crisis. La dirigencia nacional no puede darse el lujo de echar simplemente a la calle al enorme ejército de trabajadores que se desempeñan en el sector del carbón y del acero. La transferencia de empleos al sector de servicios y al área de alta tecnología y medio ambiente no es algo que pueda realizarse de la noche a la mañana. El intento podría causar una gran agitación social, con protestas de trabajadores capaces de poner en peligro el sistema.

En tercer lugar, hay intereses económicos que estimulan la política climática. Beijing ve a los vehículos eléctricos y las energías renovables como industrias estratégicas, que permitirán ganar mucho dinero en el futuro. Si China se plantea objetivos ambiciosos y habla de cinco millones de automóviles eléctricos de aquí a 2020, lo hace sobre todo para impulsar a los fabricantes locales con un mercado en crecimiento. Del mismo modo, el fulminante aumento de las instalaciones fotovoltaicas representa un gigantesco programa coyuntural para una industria deficitaria y atormentada por el exceso de capacidad.

Esto conduce sin embargo a veces a groseros errores de planificación. Las empresas de energía de China instalan tantos parques eólicos que las redes existentes ya no dan abasto. Por lo tanto, muchos aerogeneradores no hacen más que decorar el paisaje y «tomar sol». El beneficio para la política climática se esfuma así en las estepas entre turbinas eólicas inmovilizadas.

Los factores mencionados pueden ser el trampolín hacia una economía china con bajas emisiones de carbono. Sin embargo, para que ello ocurra, Beijing debe dedicarse a eliminar los principales obstáculos. Ya se han dado pequeños pasos en la dirección correcta, que deberían ser solo el comienzo en la lucha contra el cambio climático. China aún no aprovecha suficientemente su potencial y muestra una actitud carente de ambición en el escenario internacional. El país puede hacer más, y será necesario que lo haga. Para poner coto al cambio climático, al menos habrá que reducir las emisiones de CO2 antes de 2025. Cuando en los próximos años se revisen los objetivos de París, China tendrá la oportunidad de adaptar sus propias metas y de corregirlas con criterios más estrictos. Entonces se verá si toma en serio la política climática.

Jost Wübbeke, director del Programa de Economía y Tecnología, Mercator Institute for China Studies MERICS.

INDIA. Desarrollo en lugar de renovación

➤ DESDE HACE AÑOS, EL GOBIERNO INDIO REPITE EL MISMO MANTRA: «EL DESARROLLO DEL PAÍS NO DEBE SER SACRIFICADO EN EL ALTAR DE UN CAMBIO CLIMÁTICO FUTURO». TRAS LA REUNIÓN DE PARÍS, NO HAY GRANDES MODIFICACIONES.

India fue el último gran emisor de gases de efecto invernadero en entregar al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas su plan nacional de reducción de la contaminación. Después de eso, el gobierno indio prometió que para 2030 disminuirá la intensidad de emisiones de la economía en 33-35% (respecto de los niveles de 2005). Además, para 2022 se prevé triplicar la capacidad destinada a la obtención de energías renovables y lograr que ellas representen 40% dentro del total de la producción de electricidad; la capacidad de generación de energía solar se multiplicará por 25 y alcanzará los 100 gigavatios, mientras que la energía eólica se duplicará. Además, el plan contempla una clara ampliación de los recursos forestales como sumidero de carbono.

¿Se trata acaso, como proclama el gobierno indio, de la irrupción de una política que reconcilia al ser humano con la naturaleza? Parece muy dudoso. En principio, resulta llamativo que este anuncio —a diferencia del de China— no indique una fecha para el pico de contaminación. Incluso si India cumpliera los compromisos, el previsible crecimiento económico haría duplicar o hasta triplicar sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Según las estimaciones, las emisiones de este país superarán a las de la Unión Europea a más tardar en 2025 y a las estadounidenses diez años después, aun cuando todavía se encuentren claramente por debajo del nivel de China.

De acuerdo con estos cálculos, las emisiones de la India mostrarán de 2013 a 2040 el aumento más rápido entre todos los países emergentes (+4,3% por año), por no hablar de los países industrializados de la OCDE (-1,1% por año). Para entonces se seguirá estando claramente por debajo de las emisiones per cápita de China y en un nivel apenas inferior al promedio mundial.

Para poner esto en perspectiva hay que tener en cuenta lo siguiente: a fin de limitar el calentamiento global a dos grados centígrados, es necesario que las emisiones en su conjunto no sobrepasen las 1.000 gigatoneladas de CO₂. Dos terceras partes de este presupuesto global de carbono ya estaban agotadas en 2014. Los compromisos anunciados para la conferencia de París se sitúan muy por encima del objetivo de dos grados. Si no adoptan medidas adicionales para ahorrar energía y promover el uso de fuentes renovables, China (aproximadamente 40%) e India (aproximadamente 10%) por sí solas consumirán gran parte del presupuesto restante.

Si estos dos países no corrigen los niveles anunciados hasta ahora en sus compromisos voluntarios, el límite de dos grados centígrados no podrá mantenerse, sea cual fuere el esfuerzo realizado por el resto del mundo. El presupuesto de carbono restante para las naciones más pobres se reduciría así a un tamaño insignificante. La situación no pasa inadvertida para estas contrapartes, que desde hace años instan a los países emergentes a efectuar un esfuerzo mayor.

No cabe duda de que India se ha planteado objetivos ambiciosos para el uso de fuentes renovables, sobre todo en lo que respecta al desarrollo de la energía solar. Por cierto, este avance seguirá rezagado frente a las centrales alimentadas con carbón si la demanda energética aumenta en la medida prevista. Actualmente, a la hora de hacer frente a la necesidad del país, el carbón cubre una porción que va en aumento y se sitúa muy por encima del promedio internacional (44% en 2013 y una estimación de 49% para 2040), simplemente porque continúa siendo la fuente de energía más barata e India dispone de abundantes reservas, a diferencia de lo que sucede con el petróleo y el gas.

El gobierno indio ya anunció que se duplicará el nivel de extracción de carbón para 2019 y que habrá una expansión significativa de las centrales alimentadas con dicho combustible, a pesar de que esto aún no se ha integrado a los planes nacionales para la reducción de gases de efecto invernadero. En comparación con la media internacional, la antigua generación de centrales eléctricas es relativamente ineficiente; el carbón de la India tiene un alto contenido de cenizas y azufre. De todos modos, el proceso de expansión avanza aún más lentamente de lo previsto debido a problemas con la adquisición de las tierras y a la oposición bien organizada del personal perteneciente a la empresa estatal monopólica, que se resiste a las medidas que impulsan la eficiencia en el sector del carbón.

Algo similar ocurre con la expansión prevista para la energía solar. Los coeficientes de crecimiento necesarios se sitúan más de diez veces por encima del nivel actual; se requieren muchas tierras para instalaciones solares, lo que conlleva importantes problemas vinculados a la reconversión de esas superficies; algunos productores indios de los equipos no pudieron hacer frente a la presión de la competencia china y debieron desistir de su propósito. Los objetivos previstos en materia de energía eólica también están en duda porque el Gobierno ha reducido los incentivos fiscales; en esta área, al igual que en la de la corriente solar, las redes de transporte de electricidad aún son insuficientes. El punto crítico y decisivo sigue siendo el mismo: el compromiso asumido espontáneamente por la India no va más allá de lo que se alcanzó hasta ahora y de lo que se puede alcanzar con las tecnologías existentes y sin ayuda internacional. Hasta el momento, la reducción de la intensidad de energía con el crecimiento no ha sido desdeñable (-2,2% por año entre 2000 y 2013), con un ritmo similar al de China.

Algunos expertos estiman que el país podría reducir el uso de energía por unidad del PBI entre 41 y 44% sin esfuerzos adicionales, lo cual supera largamente los niveles anunciados en ocasión de la conferencia de París. Al igual que en el caso de China, esto muestra que existe una ambición moderada respecto a la política climática y que se busca obtener el mayor margen posible para el uso de energía y el crecimiento. Para justificar su posición, India esgrime desde hace años los mismos argumentos: las prioridades son el crecimiento y la lucha contra la pobreza, y ambas requieren aumentar el uso de la energía. Según las propias palabras, «la necesidad de desarrollo de la India no puede ser sacrificada en el altar de un cambio climático futuro». En segundo lugar, las autoridades recuerdan que alrededor de una cuarta parte de la población del país ni siquiera está conectada a la red eléctrica, y que debe cocinar y calefaccionar con biomasa.

Por otra parte, India no se cansa de remarcar que los países industrializados tienen una responsabilidad histórica por los gases contaminantes acumulados en la atmósfera; que no pueden ni deben rehuir a esa responsabilidad histórica; que deben dar lugar a que los países menos desarrollados puedan producir emisiones de carbono; que de lo contrario se estaría en presencia de un «apartheid ecológico». Se señala que el carbón es la fuente de energía más barata en India, que las naciones industrializadas también lo han explotado masivamente y, por último, que los altos costos de una reconversión climática y energética serían inalcanzables para el país sin una ayuda internacional.

Aunque esto no es totalmente falso, tampoco se ajusta por completo a la realidad. Las voces críticas ya han señalado repetidas veces que en cierto modo India se escuda detrás del argumento de la pobreza de la gente, tanto

en el plano interno como internacional. En lo que respecta a los hogares que aún no cuentan con acceso a la red eléctrica, su consumo sería en ese caso tan bajo que casi no tendría incidencia. Cabe destacar, sin embargo, que con sus vehículos y electrodomésticos las capas pudientes indias muestran un consumo de energía similar al promedio de los países de la Unión Europea y que la proporción de franjas prósperas aumentará considerablemente dentro de la población, junto con el peso de los sectores industriales intensivos en energía.

¿Por qué el carbón es barato? Simplemente porque en India cuesta la mitad que el producto importado, es decir, se suministra a un precio demasiado bajo como para forzar efectos de ahorro. Al mismo tiempo, el precio de las energías renovables disminuye drásticamente en el mundo; todo indica que en un futuro no tan lejano igualará a la electricidad generada con carbón. El suministro barato de carbón retrasa este proceso. En India, la energía en su conjunto se fija a precios demasiado bajos, lo que favorece el derroche y desalienta el uso de tecnologías con menor consumo. Esto ya no ocurre con la nafta y el gasoil, pero sí con el gas natural y el gas para uso doméstico, el querosén y especialmente la electricidad.

Si los precios de la energía se ajustaran al nivel internacional, los pobres de la India se toparán con dificultades, aunque eso podría compensarse fácilmente mediante las subvenciones ahorradas (que otorgan al 10% más rico diez veces más de asignaciones netas que a los más pobres). Según expertos, una política respetuosa del clima no provocaría demasiadas pérdidas en términos de crecimiento económico: permanecería por debajo o apenas por encima de 1% del PBI alcanzado en 2030 y, si se tuvieran en cuenta los efectos indirectos positivos de este cambio el resultado estimado sería prácticamente nulo. Desde una perspectiva histórica, es cierto que los países industrializados son responsables (en un grado decreciente) del grueso de los gases contaminantes acumulados en la atmósfera. ¿Pero en qué ayuda insistir con eso, si uno también se perjudica? Además, este argumento también podría ser válido en el futuro: si se limitan a los compromisos actuales, India y China tendrán ventajas en el presupuesto de carbono restante y absorberán una parte mayor a la que les correspondería per cápita y según una distribución de la carga que conlleva los costos más bajos de adaptación en el contexto internacional.

Joachim Betz es Senior Research Fellow en el Instituto GIGA de Estudios Asiáticos.

BRASIL. Inspiración y ambición

➤ EN EL CAMPO DE LA POLÍTICA CLIMÁTICA, BRASIL ASUME TRADICIONALMENTE UN PAPEL DE LIDERAZGO. SU CONTRIBUCIÓN HA SIDO IMPORTANTE PARA ALCANZAR LOS LOGROS DE PARÍS. SIN EMBARGO, HAY UN MARGEN AMPLIO PARA MEJORAR EN EL PLANO INTERNO.

En poco tiempo, los países emergentes agrupados en el BRICS han dejado de ser la esperanza de la economía mundial para convertirse en los niños problemáticos. Esto no solo es válido para China o Rusia sino también, y especialmente, para Brasil. El país del Amazonas sufre una crisis política, institucional y económica que hace pocos años era inimaginable.

Todavía en 2013 parecía que nada podía frenar el vertiginoso ascenso del coloso latinoamericano. Por entonces, un elemento clave de la fortaleza económica era su política de energía: dentro de este terreno el país es en gran medida autosuficiente, extrae petróleo de las profundidades del mar y dispone de una significativa proporción de fuentes renovables, especialmente etanol y energía hidráulica. En la presente crisis, el sector energético también juega un papel destacado, ya que el gigante semipúblico Petrobras ocupa el centro de la escena en un monumental escándalo de corrupción. Otro problema actual son los bajos precios del petróleo.

No obstante, independientemente de la crisis, el gobierno brasileño desempeñó un papel de liderazgo en las negociaciones sobre el clima en París. Esto se corresponde con la concepción propia del país en temas de política climática. Cuando Brasil declaró que se uniría a la «*high ambition coalition*» de carácter informal, puso una solución importante al alcance de la mano. Ese paso permitió quebrar simbólicamente la tradicional división entre los países industrializados, por un lado, y los países emergentes y en desarrollo, por el otro. Cabe destacar que Brasil ya era un modelo entre los países emergentes cuando reconocía que su propio bloque tampoco debía seguir actuando como si nada pasara.

El país dio un paso más el pasado mes de septiembre cuando anunció que reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero en 37% para 2025 y 43% para 2030 (con el año 2005 como base). Comparado con los compromisos de otros países, esto es muy ambicioso. Sin embargo, dadas las propias posibilidades, sería factible ir más allá de esos niveles. Además, tanto para Brasil como para los demás protagonistas, incluida Alemania, aparecen

grandes contradicciones entre las ambiciosas promesas y la práctica.

Para resolver las contradicciones hace falta un esfuerzo considerable, máxime cuando aún se está lejos de superar la crisis económica y política. Por otro lado, más allá de todas las dificultades, Brasil cuenta con excelentes condiciones para llevar a cabo una política climática ambiciosa, siempre que exista para ello la voluntad política y social. El destacado papel jugado por el país para cerrar el acuerdo puede ser una oportunidad, ya que aumenta la presión para concretar los propios objetivos. Por cierto, también fue bueno para el gobierno brasileño que el acuerdo de París tampoco fuera jurídicamente vinculante, porque —como en Estados Unidos— había escasas posibilidades de lograr su aprobación parlamentaria debido a la composición del Congreso.

Los compromisos brasileños se basan en gran medida en normas y disposiciones ya existentes, como la Ley de Política Nacional sobre Cambio Climático (2009). En el sector agrícola, se prevé recuperar 15 millones de hectáreas de praderas degradadas e incorporar cinco millones de hectáreas adicionales a los sistemas integrados de agricultura, ganadería y forestación. Hacia 2030 se pondrá fin a las talas ilegales en el Amazonas, y se compensarán las emisiones derivadas de la explotación forestal legal. El proyecto apunta a restaurar una superficie de 12 millones de hectáreas.

El sector de la energía y del transporte ha ido adquiriendo una importancia creciente para el balance climático de Brasil. El transporte genera alrededor de 45% de las emisiones, lo que obliga a mejorar la eficiencia y a ampliar el sistema público.

Se busca que la participación de energías renovables dentro de la combinación de fuentes utilizadas suba a 45%, un objetivo que no parece demasiado ambicioso si se tiene en cuenta que el valor actual se aproxima bastante a ese nivel. Algo similar puede decirse respecto a la proporción de biocombustibles, que debería llegar a 18% en 2030. En el total de la producción de electricidad, se apunta a pasar de 9% actual a 23% entre energía eólica/solar, biomasa y etanol. Esta meta ya es mucho más ambiciosa y se haría esencialmente a expensas del desarrollo de la energía hidráulica. Hasta ahora el país ha realizado una fuerte apuesta por esa fuente de energía, que de todos modos recibe severas críticas debido a los costos sociales y ecológicos que ocasiona.

En el campo de la agricultura de bajas emisiones, Brasil aparece como una inspiración y una esperanza para la comunidad internacional porque, a diferencia de otros países comparables, ha aprobado un plan nacional. Sin embargo, su implementación no avanza. El gobierno brasileño señala, además, que este tipo de agricultura de bajo carbono solo es viable si otros países se incorporan al mismo esquema. De lo contrario, no se podría hacer frente a las potenciales desventajas competitivas y comerciales. Igualmente, más allá del comportamiento de los demás países, el fuerte lobby de los productores agrícolas en el Congreso complica mucho la aplicación del plan.

El poder de este lobby se refleja en algunos hechos recientes, como el proyecto de reforma constitucional que quita al Gobierno y transfiere al Congreso la facultad de demarcar y proteger territorios indígenas y reservas naturales. Algo parecido ocurre con el código forestal: la actividad de los lobbies, la burocracia y la corrupción dificultan su aplicación. A su vez, hay asociaciones ecologistas críticas que señalan que la atención se dirige únicamente hacia el Amazonas, mientras que a otros ecosistemas con riqueza forestal no se les presta atención. Los sectores defensores del medio ambiente exigen, además, que se deje de extraer petróleo frente a las costas de Río; allí hay gigantescos yacimientos a grandes profundidades, bajo una espesa capa de sal. Sin embargo, por el momento, la extracción no sería rentable debido al bajo precio del petróleo.

En términos generales, Brasil explota de manera insuficiente sus posibilidades de producción de energía. Por citar un caso, en la actualidad se utiliza apenas 1% del potencial existente en materia de energía eólica. Para aumentar dicho porcentaje también hay que ampliar la capacidad de almacenamiento de la red eléctrica. Esto requiere intensificar el intercambio con otros países, incluida especialmente Alemania. Un modelo es —precisamente— el de Petrobras, la petrolera envuelta en la crisis, que ya ha demostrado repetidas veces que es posible establecer una cooperación exitosa en investigación y desarrollo con socios internacionales. A este ejemplo deberían seguirle ahora empresas estatales y privadas vinculadas al sector de las energías renovables.

Claudia Detsch es directora de la revista Nueva Sociedad con sede en Buenos Aires. Andreas Wille se ocupa de los temas de Brasil en el Departamento de América Latina y el Caribe de la Fundación Friedrich Ebert.

RUSIA. Relativamente razonable

➤ NO ES UN BUEN SIGNO QUE EL QUINTO MAYOR EMISOR MUNDIAL DE GASES DE EFECTO INVERNADERO SE REHÚSE A FINANCIAR MEDIDAS LOCALES PARA LA PROTECCIÓN DEL CLIMA. DE TODOS MODOS, MOSCÚ SE ACERCÓ AL DEBATE EN PARÍS Y LO ENRIQUECIÓ CON ALGUNAS PROPUESTAS.

El hecho de que Rusia terminara jugando un papel constructivo en las negociaciones de las Naciones Unidas en París resultó sorprendente para algunos analistas. Moscú respaldó la mayoría de los objetivos ambientales y abogó por un acuerdo jurídicamente vinculante para incorporar los compromisos de los países sobre protección del clima y la tarificación del carbono. El presidente Vladimir Putin, quien antes había puesto en duda la misma existencia de un cambio climático provocado por el ser humano, realizó un discurso alusivo verdaderamente convincente en la cumbre. ¿Por qué ahora, de pronto, el quinto mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero y uno de los principales productores de gas y petróleo adopta esta postura ambientalista?

En las negociaciones sobre el clima los intereses rusos se situaban fuera de los conflictos que surgían, sobre todo, entre países industrializados y en desarrollo. Como potencia emergente, desde 2011 Rusia ya no figura como beneficiario de la ayuda internacional para el desarrollo y por lo tanto no puede acceder a financiación del Fondo Verde para el Clima. Del mismo modo, el nuevo mecanismo de mercado del protocolo de París (Mecanismo de Desarrollo Sostenible) tampoco es adecuado para los proyectos en Rusia. Por si fuera poco, las sanciones internacionales le impiden recibir momentáneamente recursos a través de la financiación para la lucha contra el cambio climático.

Para los representantes de la Federación Rusa, la cumbre también fue una excelente oportunidad para volver a debatir con el mundo occidental sobre temas relativamente inocuos, como el clima y el medio ambiente. En el marco de la Conferencia sobre Cambio Climático, el ministro de Medio Ambiente, Sergei Donskoi, manifestó la intención de Moscú de activar el trabajo en el Consejo Ártico. Entre otras cosas, anunció que aportaría 200 millones de dólares, siempre que se liberaran los recursos retenidos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, un mecanismo de financiación de proyectos ecológicos, con hasta 24 millones de dólares dirigidos a iniciativas en Rusia. El plan comprende proyectos destinados a aumentar la eficiencia energética de las empresas, preservar la diversidad biológica, planificar la adaptación al cambio climático en el Ártico, mejorar el estado ecológico de ríos en la región del norte y desarrollar mecanismos de financiación para hacer frente a los daños ambientales.

En un futuro cercano los mercados mundiales del sector experimentarán un cambio, que tiene mucho que ver con la creciente importancia de las energías renovables. Se tiende, sobre todo, a una baja en el precio de las fuentes convencionales y una retracción en la demanda de petróleo y gas. Para la economía rusa esto implica riesgos significativos y también un claro potencial de desarrollo. La pregunta es cómo aprovecharlo.

«Para no quedar al margen, debemos desarrollar una estrategia y crear instituciones que promuevan la aparición de empresarios innovadores», dice Mijaíl Yulkin, director del Departamento de Medio Ambiente en la Unión de Industriales y Empresarios de Rusia. «Durante décadas nuestra idea era vender petróleo y gas y, con los ingresos, fomentar la ciencia y la tecnología», agrega Vladimir Maximov, responsable de Eficiencia Energética y Ecología en el Ministerio de Economía. «Pero eso demostró ser una quimera, porque cuando se recibe dinero del petróleo y del gas se reinvierte exactamente en el sector del cual proviene: en la industria del petróleo y del gas».

También surge escepticismo al observar el segundo gran tema del debate ruso, el de la reducción del carbono. Las exportaciones rusas se encuentran dentro de las más intensivas en carbono a escala mundial. Por lo tanto, existe una particular sensibilidad frente a las posibles restricciones impuestas en este sentido en el comercio internacional. Eso es algo que el Gobierno tiene en cuenta: a finales de 2014 se anuló la financiación de medidas dirigidas a disminuir las emisiones y la política de eficiencia energética en las regiones. El presupuesto 2016 tampoco prevé destinar fondos para ello. Todavía no está claro de dónde saldrán los recursos financieros para lograr en el país un desarrollo con bajas emisiones de carbono. A comienzos de enero del presente año se disolvió la División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía. Y hay tendencias en el sentido opuesto: en el país son muchos los que creen que es necesario aumentar el consumo interno de energía debido a las escasas exportaciones de petróleo y gas.

Sin embargo, en distintos sectores políticos y económicos del país poco a poco se va imponiendo la convicción de que —pese a la difícil situación económica— es necesario hacer algo respecto del clima. Según la opinión de algunos expertos, se podría promover un enfoque basado en estímulos socioeconómicos. Un grupo de integrantes de la

Escuela Superior de Economía y de la academia RANEPa publicó un estudio bajo el título «Caminos hacia la descarbonización total». Allí consideran que de aquí a 2050 Rusia podría aumentar su PBI per cápita de 13.000 a 41.000 dólares, desarrollar una economía sostenible y reducir al mismo tiempo en 87% las emisiones de gases de efecto invernadero.

Algo más cauteloso fue el estudio del Centro de Eficiencia Energética. Según investigadores de esta institución independiente, si se adoptaran las medidas correspondientes, Rusia podría disminuir al menos a la mitad las emisiones para 2050. Al mismo tiempo, reduciría significativamente la presencia de otras sustancias contaminantes y aumentaría tanto el confort térmico de las casas como la disponibilidad de servicios en la economía doméstica y comunal.

En cualquier caso, Rusia ya se plantea crear un sistema de regulación del carbono. A finales de 2015 entró en vigor una ley que obliga a publicar un informe sobre sus emisiones a las empresas que emiten más de 150.000 toneladas de equivalente de CO₂ de gases de efecto invernadero por año. A partir de 2017 el requisito de notificación de carbono se extenderá a las compañías que superen anualmente las 50.000 toneladas de equivalente de CO₂, así como a las empresas de transporte aéreo, de transporte ferroviario y de navegación marítima e interior.

Para este año se espera otra disposición determinante. El Ministerio de Desarrollo Económico está preparando una ley que permite al Gobierno regular las emisiones, ya sea en forma de un impuesto sobre el carbono o de un mercado del carbono. Por cierto, los planes se han topado en la misma fase previa con una importante resistencia de sectores económicos, que consideran que bajo las actuales condiciones estas restricciones son una carga demasiado pesada. No obstante ello, algunas empresas ya han comenzado a elaborar informes sobre emisiones de carbono en el marco de programas internacionales voluntarios.

Angelina Davidova dirige la Agencia Ruso-Alemana de Información Ambiental y trabaja como periodista independiente para diferentes medios rusos e internacionales.

JAPÓN. Una oportunidad perdida

➤ EL PRIMER MINISTRO SHINZO ABE SUELE AFIRMAR QUE SU PAÍS DEBE VOLVER A ASUMIR UN PAPEL DE LIDERAZGO EN EL MUNDO. SIN EMBARGO, EN LAS CUESTIONES RELATIVAS AL CLIMA, TOKIO IMPONE UN FRENO. LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JAPONESA VIENE MÁS BIEN DESDE ABAJO.

Japón no le hace honor a Kioto. La antigua ciudad imperial marcó con su nombre el primer acuerdo climático de la historia. Sin embargo, en el marco de la conferencia celebrada en París, el gobierno del primer ministro Shinzo Abe diluyó claramente sus objetivos de emisión: si la contribución ambiental de todos los países fuera tan escasa como la de Japón, la Tierra se calentaría entre tres y cuatro grados centígrados hasta el final del siglo. Eso sería una catástrofe. Un líder se ha convertido en rezagado. Y si no cambia su política, quizás no pueda alcanzar ni siquiera sus pobres objetivos.

Desde hace décadas la industria japonesa se ocupa de optimizar su eficiencia por razones económicas, pero el ahorro de energía no ha formado parte de los objetivos políticos. Hasta hace cinco años, antes de la catástrofe del reactor de Fukushima, las compañías eléctricas de Japón —diez monopolios regionales— promovían incluso un mayor consumo. Tokio nunca se había planteado alcanzar sus objetivos ambientales iniciales mediante el ahorro, sino a través de un incremento de la energía nuclear. Se apuntaba a aumentar su participación a 50% para 2030. Las voces escépticas fueron acalladas; se ignoraron los informes de expertos sobre la deficiente protección contra tsunamis de las plantas nucleares, las advertencias sobre las fallas de seguridad y la negligencia imperante en las instalaciones. Las empresas del sector mitificaron la absoluta seguridad de la energía nuclear; y los liberal-democráticos (instalados durante décadas en el poder y provistos de estrechos vínculos financieros con la energía nuclear) se limitaron a repetir ese discurso. Los partidos de la oposición también contribuyeron: a cambio, recibieron dinero de los sindicatos que agrupaban a los trabajadores de las plantas nucleares. Se buscó obstaculizar y desprestigiar a las fuentes alternativas, sobre todo a la energía geotérmica, de la que habría más que suficiente gracias a los 108 volcanes activos.

Se ha roto el mito de la energía nuclear segura; al menos, la población ya no cree en él. Dos de cada tres japoneses consideran que hay que abandonar su uso de manera inmediata o gradual. El Partido Democrático, que gobernó el país desde 2009 hasta 2012, se mostró medianamente dispuesto hacia el final de su mandato a aceptar la

demanda de los electores. Pero Estados Unidos presionó para que no se abandonara la tecnología nuclear. Washington teme que, ante el hueco, China y Rusia den un salto dentro de este rubro, que es clave en términos militares. Los liberal-democráticos, que hace tres años regresaron al poder, hicieron suya la demanda estadounidense (afirmando, además, que un Japón con centrales nucleares era una virtual potencia nuclear). Abe busca volver a poner en marcha las plantas contra la voluntad de los japoneses. Para confirmar la seguridad de las instalaciones, las nuevas autoridades de control violan hasta sus propias reglas.

Ya se reincorporaron tres reactores a la red, y seguirán otros. Dentro de este contexto, Tokio no se priva de realizar trucos desagradables. En la prefectura de Fukui, sus habitantes habían logrado que un tribunal prohibiera la nueva puesta en marcha de la central nuclear de Takahama. La empresa Kepco apeló la decisión. Poco antes de la renegociación y sin que mediaran explicaciones, se reemplazó a los jueces: juristas locales debieron dejar el lugar a sus colegas de Tokio, quienes fallaron a favor de Kepco.

De todos modos, el propio Abe no parece estar seguro respecto a la proporción de energía nuclear que puede alcanzar. Por lo tanto, en 2015 redujo significativamente los objetivos ambientales de Japón: las emisiones de CO2 deberían disminuir en 26% en el período 2013-2030. Esto es menos de lo que se había prometido en el Protocolo de Kioto de 1997. Según las previsiones, 20-22% de la electricidad se generaría en centrales nucleares. En 2013, la electricidad en Japón se producía casi exclusivamente a partir de combustibles fósiles. Además, el país reduce sus emisiones nominales de CO2 con el comercio de carbono. Exporta centrales eléctricas de carbón relativamente «limpias» a países en desarrollo y así obtiene créditos de CO2. Japón, el mayor importador de carbón en el mundo, prevé instalar 41 nuevas plantas de este tipo en su propio territorio. Incluso después de la reunión de París. Y aunque la electricidad generada con carbón provoca un impacto ambiental mucho mayor que si se produce con gas natural, el Estado nipón otorga beneficios fiscales a las importaciones de carbón.

El Estado japonés no ha aprendido nada del desastre de Fukushima. Sigue afirmándose a la energía nuclear como a la caza de ballenas, otro anacronismo. Tokio favorece el uso del carbón frente al gas y las energías renovables; y lo hace, también, porque hay grandes empresas que producen electricidad con carbón, a diferencia de lo que ocurre con la energía solar u otras fuentes. Asimismo, el gobierno de Abe redujo la tarifa de alimentación para energía solar y eólica, que había sido introducida por sus antecesores; y apaña a las empresas monopólicas del sector cuando se rehúsan a alimentar energía solar «por razones técnicas» y porque supuestamente la red está sobrecargada (en realidad, porque quieren reservar capacidad para la energía nuclear). Varias de las grandes compañías eléctricas quebrarían si tuvieran que dar de baja definitivamente a sus plantas nucleares inmovilizadas. Desde luego, sería el caso de Tepco, la operadora de Fukushima. La decisión dirigida a separar la producción eléctrica de los operadores de red también podría ser anulada por el Gobierno, que hace todo lo posible para mantener con vida a las empresas de electricidad.

Algo muy diferente ocurre en la población, la industria y muchas comunidades. Aunque los japoneses tienen poco sentido del ahorro de energía (no colocan materiales aislantes en sus casas, dejan el aire acondicionado encendido durante horas en vehículos estacionados), sí cuentan con un espíritu innovador. Quien recorre el campo se topa cada vez más con grandes instalaciones de colectores solares. En los techos de las viviendas se instalan paneles fotovoltaicos. Esto tiene poco que ver con París, y mucho con Fukushima y la profunda desconfianza que inspiran el poder central y los monopolios eléctricos. En Japón la transición energética viene desde abajo; y con una velocidad mayor a la prevista. Más que fomentar este cambio, el Gobierno busca frenarlo. Protege a las compañías del sector para evitar que colapse su modelo de negocios.

El primer ministro Abe suele afirmar que Japón debe volver a asumir un papel de liderazgo en el mundo. Para ello no habría ningún ámbito más adecuado que el de la futura revolución energética. La investigación y la industria del país disponen de la capacidad necesaria. Nippon llegó a ser líder en el mercado de la energía solar; Toyota se adelantó 15 años al resto de la industria automotriz con su sistema híbrido, y hoy ya cuenta con vehículos impulsados por hidrógeno que circulan por Tokio. Si Abe quisiera dar a Japón un papel de liderazgo, debería convertir a su país en el modelo de una sociedad «post-carbono». En lugar de hacerlo, Tokio pasó sin pena ni gloria por la cumbre climática de París. Los medios nipones alabaron los resultados alcanzados, y el Gobierno defendió sus insuficientes objetivos ambientales. Así, Japón ha perdido su mejor oportunidad de los últimos años.

Christoph Neidhart es corresponsal del Süddeutsche Zeitung en Tokio.

Traducción: Mariano Grynszpan

Fuente: <https://www.fes.de>